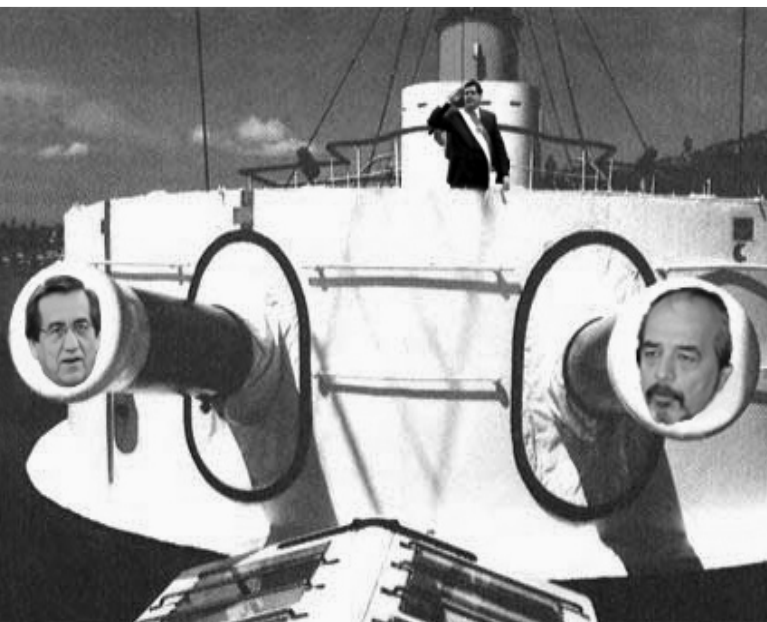


LOS PRIMEROS PASOS

de ALAN II



El primer tramo de García, ¿es para tranquilizarse o más bien para preocuparse? ¿Y la oposición? ¿Cuáles son las buenas señales y cuáles las malas?

¿Romance apasionado o cauto servinacuy?

Carlos Basombrío
Analista político

>>> En su primer Gobierno, por esta época el país se había entregado de lleno a los brazos de García. En los primeros meses llegó a tener cifras de aprobación tan espectaculares que bordeaban el 90 por ciento. Se decía, por entonces, que a García le disgustaba mucho el estar tan alto en las encuestas. Después de todo, político hábil, sabía que cuando se llega a un pico tan alto lo único que viene después es la bajada. ¡Vaya que no se equivocó! Si nos guiamos por la opinión de la ciudadanía expresada en las encuestas, no hay el riesgo de que una situación así se repita esta vez. El Gobierno, y en particular el Presidente, gozan en estos primeros meses de una importante aceptación ciudadana, pero a la vez un análisis más detenido da cuenta de que no estamos ante un romance apasionado, sino ante un cauto servinacuy.

La encuesta nacional de Apoyo de setiembre le dio al Presidente una aprobación de 58 por ciento; alta sin duda, pero llama la atención que no habiendo ocurrido ninguna crisis importante esta sea 5 por ciento menor que la del mes anterior. La Universidad de Lima le da una aprobación en la capital de 67,6 por ciento (Apoyo, 62 por ciento en Lima); muy importante fuera de dudas, más aun cuando se distribuye de manera bastante pareja en todos los estratos socioeconómicos, incluyendo el E, que tan descontento se había sentido con Toledo. Sin embargo, a continuación se le pregunta a la gente cuál es el líder político con el que más simpatiza. Dado el nivel de apoyo al Presidente, se podría suponer que lidera de lejos esa lista. Pues no: está en un muy distante segundo lugar con solo 14,4 por ciento; lejísimos de Castañeda Lossio, que tiene 32,8 por ciento, y pegadito a Fujimori (11,7 por ciento), a Lourdes Flores (9,7 por ciento) y Valentín Paniagua (9,3 por ciento).

Parece que más que frente a un amor adolescente, estamos ante un país que ha sufrido tantos desengaños que prefiere, por ahora, tomar las cosas con calma y ver para creer.

Ello llama más la atención, dado que en estos primeros meses Alan García gobierna virtualmente sin oposición.

La fuerza arrasadora que casi lleva a la Presidencia a Ollanta Humala se ha desvanecido, en gran medida por los errores, profundas inconsistencias y divisiones en el llamado nacionalismo. Muy probablemente las elecciones regionales de noviembre confirmen esa tendencia y el espacio que hoy ocupa Humala sea disputado por otros. Por el otro lado sucede algo similar: Unidad Nacional quedó mal herida por la derrota electoral. Rey y Barba no dudaron en pasarse al Gobierno y el liderazgo de Lourdes Flores, luego de sus dos derrotas en elecciones presidenciales, ha quedado bastante maltratado. Además, el hombre que denunció a Flores como la candidata de los ricos ha hecho suyos muchos de sus planteamientos y tomado prestado varios de sus cuadros.

Por ahora no hay, ni de un lado ni del otro del espectro político, un planteamiento estructurado de oposición al Gobierno con ideas consistentes y atractivo para la opinión pública. La “oposición” viene más bien de dentro del partido y adopta la forma de puyazos y serruchadas de piso; principalmente entre los tres secretarios generales del APRA, en una demasiado temprana lucha por posicionarse para la sucesión de Alan García.

Creo que la cautela de la población frente a García no se explica solamente por el trauma que significó su primer Gobierno y el temor de que se repita el desastre de esos años. Puede que también influya que este segundo Gobierno aprista emite signos contradictorios y deja todavía muchas incógnitas.

Es verdad que, a diferencia de su predecesor, Alan García sabe manejarse mucho mejor y mantiene la iniciativa, colocando temas en agenda con gran efectividad (efectismo, dirían muchos). Pero en la sustancia de su Gobierno, por lo que se ha visto hasta ahora, corre el riesgo de repetir el esquema de Toledo. Por un lado, un manejo prudente de la economía que le permita al país seguir creciendo —y ojalá reducir varios puntos los indicadores de pobreza—, pero, a la vez, falta de voluntad política para enfrentar con coraje algunos problemas estructurales que afectan la viabilidad del país en el mediano plazo y que explican las cíclicas explosiones de descontento y búsqueda de salidas “a lo Humala”. Hay ya, por ejemplo, un cierto escepticismo de que García vaya a dar pasos significativos durante su Gobierno para hacer las indispensables reformas en educación, justicia y seguridad.

Finalmente hay que decir que en muchos de los temas que han sido preocupación de la revista *ideele* a lo largo



de estos años, el Gobierno de Alan García está tomando decisiones alarmantes.

Mantiene una relación más que cordial con el fujimorismo. Sin cuestionar los buenos modales en la política, preocupa lo que ello puede implicar en términos de concesiones y eventuales acuerdos con quienes no han hecho autocrítica alguna respecto de la dictadura y sus consecuencias. En su discurso inaugural, no tocó ni con el pétalo de una rosa a la dictadura de Fujimori. El poco interés que tiene en el tema se ha ratificado con el nombramiento de un procurador anticorrupción gris y de dudosas calificaciones.

Otro frente es el de la pena de muerte. Más allá de mis discrepancias con esta medida, lo que más me preocupa es la intención de manipular el miedo de la población —que aquí y en tantos lugares favorece soluciones de corte autoritario y reñidas con los derechos y libertades— para obtener réditos políticos fáciles. (Fujimori fue un maestro al respecto.) Creo que, finalmente, pena de muerte no va a haber en el Perú, y lo que García quiere es aparecer como el verdadero defensor de la población frente a las élites políticas e intelectuales “insensibles al sufrimiento del pueblo”. En esa misma línea va toda la retórica antiderechos humanos, la agresividad contra la CVR y la ofensiva contra las ONG. Otro ejemplo es el apoyo presidencial a restablecer el Servicio Militar Obligatorio, tratando de montarse de nuevo sobre un extendido sentido común popular según el cual la delincuencia es resultado de que los muchachos ya no tienen la formación castrense que recibían en el pasado.

Están también ya sobre la mesa pedidos para una amnistía general a los responsables de violaciones de los derechos humanos, planteadas por prominentes congresistas apristas. No ahora, pero en un tiempo más,

este tema puede terminar siendo parte de la agenda política del Gobierno, y contar con el entusiasta apoyo del fujimorismo y, probablemente, de sectores del Partido Nacionalista y UPP. (No olvidemos que Ollanta Humala sería uno de los beneficiados.)

Es verdad que no todos en el Gobierno piensan así. Varios ministros hicieron público su desacuerdo con

la pena de muerte (aun cuando después, disciplina compañeros, firmaron el proyecto de ley) y el Ministro de Defensa, el único político con peso propio en el Gabinete, tiene un discurso diferente y en muchos casos contradictorio con el del Presidente en varios de estos temas. No pasará mucho tiempo antes de que sepamos qué idea se impone al final.

¿Réquiem por la transición?

Gonzalo Gamio
Profesor PUCP

>>> Soy una de esas personas que pasó su adolescencia bajo el primer Gobierno de Alan García. Tengo un recuerdo bastante nítido de las colas que formaba la gente para adquirir alimentos y productos de primera necesidad en los mercados, de los apagones y los atentados, de los 'paquetazos' y los sonados escándalos de corrupción. Cuando García dejó el poder, en 1990, tenía 19 años y cursaba mis primeros semestres en la Universidad Católica. Fui testigo —como tantos jóvenes de mi edad— de cómo el recuerdo de la censurable conducción del Estado bajo el Gobierno aprista y la hiperbólica retórica de García abonaron el terreno para el imperio de la antipolítica y el grosero "pragmatismo" en la década autoritaria de Fujimori. Para ser honesto, nunca me imaginé a García asumiendo el poder por segunda vez. La sola idea de votar por él me parecía inconcebible.

No obstante, *lo hice*. Tengo que decir que lo hice desde la percepción de que las circunstancias planteadas por la segunda vuelta en parte "me forzaban" a hacerlo, en la medida en que creía afrontar, como ciudadano, una especie de dilema trágico: o García, o Humala. El candidato a quien había apoyado con mi voto en la primera vuelta había quedado fuera de la contienda; votar en blanco me parecía una evasión cobarde cuando lo que estaba en juego era el futuro de las instituciones democráticas. Consideraba que debía optar por el menor de ambos males,

y ante el potencial autoritario de la propuesta nacionalista, concluí que tendría que votar por García. Creí respaldar —sin demasiado entusiasmo, y con muchas dudas— una "alternativa democrática". Lo hice pensando en las (en realidad remotas) posibilidades de que un eventual Gobierno aprista pudiese recuperar la agenda de la transición, que la gestión de Toledo asumió solo parcialmente y con cierta apatía. Me refiero particularmente al seguimiento de la agenda democrática en materia de la política anticorrupción y la observancia de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Creo que el futuro de la agenda de la transición en el contexto del Gobierno aprista se torna sumamente incierto. El silencio del discurso inaugural de Alan García frente al tema del sistema anticorrupción y a las políticas de defensa de los derechos humanos ha sido profundamente revelador respecto de la actitud de un Gobierno que ha prometido imponer "orden y autoridad", que se ha comprometido innecesariamente con iniciativas populistas y virulentas como la propuesta de aplicar la pena de muerte a los violadores de menores que asesinen a sus víctimas, o que ha asumido una actitud hostil frente al trabajo de las organizaciones no gubernamentales en materia de justicia y medio ambiente. La presencia en el Gobierno de personajes vinculados a los sectores del conservadurismo político y religioso y la desconcertante proximidad con el fujimorismo suscita serias dudas sobre la continuidad de las políticas de justicia transicional iniciadas en el Gobierno de Valentín Paniagua. En el terreno de las formas, cierto trato vertical a los ministros, y cierto discurso de corte voluntarista y paternalista —con matices religiosos de muy viejo cuño— nos devuelven al tradicional estilo de la política presidencialista, que creíamos ya desaparecido en el Perú, justamente a partir de finales del año 2000.

Resulta evidente que los actores políticos del actual Gobierno —como la mayoría de los grupos políticos presentes en el Congreso de la República— carecen de la voluntad política necesaria para hacer justicia en torno de los temas de corrupción y violación de los derechos humanos bajo la gestión de Alberto Fujimori. Tanto en la campaña electoral como en los primeros meses en el ejercicio del poder, el entorno de García ha mostrado gestos de cercanía con el fujimorismo, pese a que este grupo político avaló y encubrió sistemáticamente las acciones de la organización criminal comandada por la dupla Fujimori–Montesinos en la década de 1990. Ninguna forma de cálculo político por razones de apoyo parlamentario podría justificar la condescendencia del APRA para con las evidentes pretensiones del grupo fujimorista de lograr la impunidad de su líder. El partido de gobierno no tuvo reparos en presentar a una representante de Alianza para el Futuro para conformar la Junta Directiva del Congreso Nacional. Que el propio exabogado de Fujimori logre en el Congreso la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, o que la propia hija del extraditable logre presidir la Liga Parlamentaria Peruano–Chilena sin ninguna clase de protesta articulada por los restantes grupos políticos resulta francamente vergonzoso y desconcertante; se trata de situaciones que constituyen por sí mismas un atentado contra la ética más elemental. Ya el presidente García y el Primer Ministro han señalado que para ellos el “asunto Fujimori” constituye un problema judicial frente al que guardarán un “prudente silencio” y asumirán una “perspectiva neutral”, con el fin de no “politizarlo”. Curiosa actitud la de los representantes de un Estado que en teoría constituye una parte interesada en el proceso de extradición de un personaje sobre el que pesan acusaciones de corrupción en el ejercicio de la función pública y crímenes de lesa humanidad.

En el tema de las recomendaciones y las reparaciones propuestas por la CVR la posición del Gobierno es absolutamente ambigua. Por un lado, resulta esperanzador que el primer ministro Jorge del Castillo haya anunciado medidas orientadas al cumplimiento del Plan Integral de Reparaciones; por otro, el mutismo presidencial frente al tema de los derechos humanos, la complacencia del oficialismo frente a la campaña en pro de la pena de muerte y sus escarceos con el fujimorismo fortalecen el escepticismo de quienes razonablemente dudamos de la buena voluntad de la nueva administración respecto de la aplicación de las reformas planteadas en el *Informe final*. Después de tres años de entregado el documento, las únicas personas que han sido efectivamente procesadas a causa del *Informe* han sido los propios ex comisionados, denunciados injustamente ante los tribunales por militares en retiro involucrados en la dirección

de las antiguas zonas de emergencia y por políticos vinculados a la dictadura fujimorista. No olvidemos que más de uno de los gestores de la exacerbada campaña de demolición dirigida contra el trabajo de la CVR y contra la persona de sus integrantes hoy ocupa un lugar importante en el equipo de Gobierno o en el Consejo de Ministros.

El (¿reciente?) interés del vicealmirante Giampietri por investigar a las ONG apunta a propiciar el debilitamiento de los espacios de vigilancia cívica y control democrático del poder que se generan desde la sociedad civil. Para algunos sectores del oficialismo, la sociedad civil habría usurpado sin más espacios de acción política que corresponderían por derecho propio a los partidos políticos, que perdieron protagonismo público durante el régimen de Fujimori. Quienes así piensan confunden groseramente el plano de la representación y la pugna por el acceso al poder con el ámbito de actuación de las organizaciones que procuran garantizar que se respeten los principios constitucionales y que la voz del ciudadano común pueda ser escuchada en el espacio público. El Gobierno parece haber desestimado las tareas pendientes de la agenda de la transición, y ha dirigido sus baterías contra quienes han señalado la necesidad de sacarlas adelante. Es preciso recordar que los temas básicos de la transición política en materia de derechos humanos, justicia y reconstrucción institucional surgieron de planteamientos de la sociedad civil organizada —universidades, colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones voluntarias, comunidades religiosas, etcétera—, de aquella ciudadanía que salió a las calles para protestar contra el fujimorato exigiendo democracia y respeto por la legalidad y las libertades públicas. Si la nueva administración del Estado ha desatendido estos temas, quizá sea tiempo de que los ciudadanos le hagamos saber, una vez más —desde los canales que establecen la Constitución y las leyes— que puede estar equivocando el rumbo.



Alan para *dummies*

Pedro Salinas
Periodista

>>> El miedo a Humala hizo el milagro de devolverle el poder a uno de los políticos más desprestigiados de América Latina. Al punto que quienes fuimos sus más acérrimos críticos, allá por los ochentas, haciendo de tripas corazón, valoramos su triunfo electoral como una buena mala noticia. Porque nos libró del humalismo y porque nos libró del Orangután Escarlata, Hugo Chávez.

Y hablo de milagros porque, vamos, estoy seguro de que usted, como yo, ni en sus más estrambóticas y estrafalarias pesadillas se imaginó que en el Perú se iba a elegir con alivio al mismo que hace dieciséis años dejó al país ahogándose en sangre y con una hiperinflación desbocada. O descocada, que en este caso es lo mismo. Pero vivimos en el Perú, y acá, ya sabemos, cualquier cosa puede pasar. Y pasó.

Ahora bien, no sé todavía si García redima su reputación en esta oportunidad única que se le presenta. Porque, ojo, pocas veces la historia le concede a un Presidente que ya fracasó estrepitosamente, como es su caso, una segunda oportunidad tan ventajosa. Con los números macros estables. Con un PBI en crecimiento. Con un contexto internacional favorable. Con la inflación baja. Sin terrorismo.

Sin embargo, de lo que se ve hasta la fecha a manera de balance prejuicioso —porque, claro, estamos hablando de Alan García—, lo que tenemos por el momento es una gestión tibia, de medio pelo, preñada de mediocridad, regularona nomás, lo que, dicho sea de paso, es algo tan nuestro como el cebiche y el perro calato. Y la verdad, la verdad, es que García tampoco está ayudando mucho a proyectar una imagen de renovación, aunque se haya jalado a sus filas al líder de un grupo que se llama así, que esa es otra historia.

Porque no me vengan con que la intención de reinstaurar el Servicio Militar Obligatorio supone un paso adelante para el país, o que la cantinela de la pena de muerte supone vientos de cambio. No pues. No me jodan. Eso no es más que chapuza e improvisación. La segunda piel de Alan García, o sea. Entonces, ¿de qué nuevo García me habla Rafael Rey? Porque en ese par de ideas fuerza no percibo evolución o metamorfosis positiva, sino envejecimiento de la demagogia de siempre de Alan, qué quiere que le diga.

¿Y la oposición? No existe, oiga. Que si está viva, está más muda, cojitranca y burrituerta que nunca. ¿O ya olvidamos que lo primero que denunció este Gobierno fueron

“bombas de tiempo”, como para justificar por adelantado las grandes desbarradas que se avecinan, y la oposición no dijo ni mus? ¿Y que uno de los que salió con esta cantaleta fue nada menos que Luis Alva Castro, uno de los gestores del apocalipsis aprista, en plan tripulación Capitán Garfio? El caradurismo de toda la vida, es decir.

Entiendo que hay quienes se han creído el rollo de que Alan García ha cambiado. Entre ellos, muchos de los que se hacían pis y hasta pos, ante la sola idea de que García ganara las elecciones. Porque ha llamado a Hernando de Soto para que le cocine un teelecé hacia dentro, que suena, dicho sea de paso, a que nos van a hacer una endoscopía. Porque ha enviado a Felipe Ortiz de Zevallos como embajador a Washington. Porque ha puesto a lo



mejorcito del APRA como Premier. Porque ha escogido a un economista silente como Ministro de Economía. Y así. Pero eso no es afrontar las reformas importantes, sino lanzar fuegos artificiales para apantallar, como si viviéramos en Disney. Y si la cosa viene por ahí, por la vía de las medidas efectistas pero poco trascendentes, entonces, como ha dicho Fernando Rospigliosi, en ese caso los problemas se van a acumular y en algún momento empezarán a estallar. Y aquí, ya sabemos también, cuando las cosas estallan terminamos con un nuevo político con la cara de Humala o de Fujimori.

Yo, por mi parte, todavía no me la creo. Que García haya cambiado, digo. Quizá porque tengo pegado en el corcho que cuelga al lado del teclado un billete de cincuenta mil intis con el cacharro de Víctor Raúl, mirándome la cara de tetudo que me manejo, refrescándome la memoria, diciéndome que ni se me ocurra perdonarle la vida anticipadamente a quien nos debe varias vidas, y a quien nos dejó tatuado en la piel y de sopetón el mapa del Perú haciendo agua como el *Titanic*, gritando *mayday, mayday*. Que mirar las cosas de otra manera, no es ver por el ojo sino por el ojete.